



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: DIEGO LEÓN RESTREPO HENAO
Demandado: SEGURIDAD BALUARTE CTA
Radicado: 05001 31 05 012 2018 00418 01
Sentencia: S-205

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín el día 9 de julio de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

DIEGO LEÓN RESTREPO HENAO demandó a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BALUARTE CTA, para que una vez se declare la existencia de una relación laboral en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, regida por un contrato de trabajo a

término indefinido desde el 30 de agosto de 2014 hasta el 19 de junio de 2018, terminada bajo la figura del despido indirecto, se le condene al pago del reajuste de los salarios recibidos durante todo el tiempo laborado, los salarios adeudados del 6 de mayo al 19 de junio de 2018 junto con sus intereses, las horas extras diurnas, nocturnas y dominicales, prestaciones sociales, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social, indemnización por despido sin justa causa, indemnizaciones por falta de pago de salarios y prestaciones, de pago de cesantías y de intereses a las cesantías, así como las costas y agencias en derecho.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que el 30 de agosto de 2014 suscribió un Acuerdo Cooperativo de Trabajo Asociado con BALUARTE CTA, simulando un verdadero contrato de trabajo; que se desempeñó como guarda de seguridad; que como contraprestación directa se estableció una suma mensual de \$686.000, sin respetar el valor del salario mínimo legal mensual vigente; que la labor fue desempeñada de manera personal, atendiendo siempre las instrucciones del empleador; que desde el 6 de mayo de 2018 no se le volvió a programar para trabajar y se le pidió estar en disponibilidad para atender el llamado de la empresa; que se encuentra en un estado de subordinación y verticalidad frente a la demandada; que en el mes de diciembre de 2016 sufrió un accidente laboral que generó observaciones y recomendaciones médicas; y que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral de 13.20%.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

BALUARTE CTA contestó la demanda aceptando la existencia del Acuerdo Cooperativo suscrito entre las partes, la fecha de vinculación como asociado, el valor de la compensación que se acordó pagar y el accidente ocurrido en el mes de diciembre de 2016, advirtiendo que el

demandante no se volvió a presentar a sus labores desde el 24 de mayo de 2018. Aclara también que en ningún momento se desconoció el salario mínimo irrenunciable y explica que las Cooperativas de Trabajo Asociado tienen una reglamentación legal y características propias distintas a los contratos de trabajo. Se opuso además a las pretensiones de la demanda por considerar que siempre actuó dentro del marco legal, respetando las estipulaciones contractuales establecidas en el acuerdo suscrito con el asociado. Como excepciones propuso las de pago, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, ausencia de sustento fáctico y probatorio para determinar las pretensiones, temeridad, mala fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 9 de julio de 2021, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a la demandada BALUARTE CTA de todas las pretensiones formuladas en su contra por el demandante, a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$454.263.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante presentó recurso de apelación solicitando una valoración diferente a la prestación personal del servicio al ser un hecho que quedó confesado; la representante legal de la parte demandada dijo que es cierto que el señor DIEGO LEON RESTREPO prestó sus servicios como guarda de vigilancia privada, solo que lo enmarca a una modalidad de contrato diferente a la que se pretende. Las pruebas documentales obran en el expediente, no solo son las colillas de pago que la Cooperativa llama compensación pero que en realidad son salario, compensaciones de una prestación personal del servicio.

Dice además, que aquí quedó probado que había una subordinación, el hecho de que se suscriba un contrato cooperativo no quiere decir que se trate en la práctica y a la hora de la prestación del servicio de un asociado cooperativo que está en una relación de horizontalidad, aunque se haya suscrito el contrato antes mencionado, acá estamos en la realidad de una situación de subordinación, por lo que solicita se declare que se está simulando un acuerdo cooperativo pero en la realidad más allá de las formas lo que existe es un contrato de trabajo con una probada prestación del servicio, con una probada subordinación y con una probada tercerización, la que no se desvirtúa por el hecho de no haberse vinculado a las empresas a las que se le prestó el servicio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término del traslado para alegar concedido a las partes, la demandada hizo uso de su oportunidad para advertir que quedó suficientemente probado en el proceso la calidad en que actúan las Cooperativas de Trabajo Asociado y sus características principales, como que nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que deciden unirse para trabajar mancomunadamente bajo sus propias reglas, en donde todos sus socios tienen derecho a una compensación por el trabajo aportado. Agrega que entre los miembros y la propia Cooperativa no se genera una relación de empleador – empleado, en donde lo que existe es un Coordinador de las actividades y un vínculo de naturaleza cooperativa y solidaria.

CONSIDERACIONES:

Con relación a la necesidad de sustentar adecuadamente el recurso de apelación como medio de impugnación de las providencias judiciales, que guarda íntima conexidad con el principio de la consonancia, el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, ordena al *ad quem* ceñir su estudio

en segunda instancia sólo a las materias objeto de la censura o ataque a través del respectivo recurso de apelación.

En tal sentido, ha dicho la jurisprudencia laboral que las reglas que gobiernan tal recurso son precisas en circunscribir la competencia funcional del ad quem a las materias respecto de las cuales el apelante haya manifestado inconformidad y cumplido con la carga procesal de fundamentar sus reparos. Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la de julio 07 de 2009, radicación 32960, la SL 2764 del 22 de febrero de 2017 o la SL 2010 del 5 de junio de 2019, a cuyo texto se remite la Sala.

De otro lado, también es importante tener en cuenta la regulación en torno al principio de congruencia establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso según el cual *"La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que éste código contempla..."*, situación que impide analizar aspectos no incluidos dentro de las pretensiones de la demanda, la cual no contiene ninguna pretensión dirigida a obtener el reintegro o indemnización derivada del estado de salud del demandante

Contrario a lo que usualmente ocurre, el apoderado del señor DIEGO LEÓN RESTREPO HENAO no plantea la tesis de la intermediación laboral por parte de SEGURIDAD BALUARTE CTA al momento de la vinculación como guarda de seguridad, lo que llevaría a considerar, de ser así, que los directos empleadores habrían sido las empresas usuarias o a quienes se les prestó el servicio, en tanto la Cooperativa solo sería solidariamente responsable de las obligaciones sociales presuntamente causadas por no haber informado la calidad en que actuaba.

Lo que en este caso se reclama, es la existencia de una relación laboral con SEGURIDAD BALUARTE CTA de quien se predica su calidad de verdadero empleador, derivada de esa prestación personal del servicio, en la que además estarían acreditados todos los elementos para que se entienda configurada una relación de tipo laboral, todo lo cual habría quedado acreditado en el curso del proceso.

Ante todo, es importante dejar en claro que las siguientes circunstancias fácticas concretas no son objeto de discusión a esta altura del proceso: **i)** la suscripción entre las partes de un Acuerdo Cooperativo e Trabajo Asociado para el desempeño del cargo de vigilante, cuya fecha de inicio fue el 30 de agosto de 2014; **ii)** el valor de la compensación establecida para el año inicial de \$686.000; **iii)** la calificación de pérdida de capacidad laboral de 13.20% efectuada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 23 de mayo de 2018; y **iv)** que para el año 2018 aquella compensación ascendía a \$856.140, más auxilio de transporte de \$88.211 y un auxilio adicional de \$529.713.

En este orden, independientemente del planteamiento que se hace en la demanda, para la Sala la relación existente entre SEGURIDAD BALUARTE CTA y el señor DIEGO LEÓN RESTREPO HENAO, es la propia de un acto cooperativo de asociación para el trabajo, derivado de la suscripción voluntaria del acuerdo mencionado, del cual deviene para quienes lo celebran la calidad de trabajadores asociados, y por ende de gestores de su propia empresa y, en consecuencia, no se generan las obligaciones propias del contrato de trabajo, toda vez que a sus cooperados no se les aplica la legislación laboral ordinaria sino la normatividad especial del sector cooperativo (Ley 79 de 1988 y Decreto 468 de 1990, entre otros).

De conformidad con el art 10 del Decreto 4588 de 2006, *por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado*, el trabajo asociado cooperativo

se caracteriza por ser una actividad libre, autogestionaria y solidaria, material o inmaterial es decir, física o intelectual, que un grupo de personas naturales desarrolla en respuesta a su libre asociación, ejerciendo su propio autogobierno con fines de colaboración y ayuda mutuas. A su vez el art. 12 de la misma normativa, prescribe que el objeto social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. *“es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la actividad económica que desarrollarán encaminada al cumplimiento de su naturaleza en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la materia.*

Y a renglón seguido se aclara en el párrafo de la misma norma lo siguiente: *“Las Cooperativas de Trabajo Asociado cuya actividad sea la prestación de servicio a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada, y educación, deberán ser especializadas en la respectiva rama de la actividad; en consecuencia, las cooperativas que actualmente presten estos servicios en concurrencia con otro u otros deberán desmontarlos, especializarse y registrarse en la respectiva superintendencia o entidad que regula la actividad.”*

Y, dentro de este análisis, el artículo 9º de la Ley 1233 de 2008, en concordancia con lo establecido por el artículo 15 del Decreto 4588 de 2006, regulan la posibilidad de que las CTA vinculen a sus huestes personal que no tiene la calidad de cooperado, sino, por el contrario, trabajadores asalariados, es decir, obviamente, por contrato de trabajo, limitados a los siguientes expresos eventos:

“Los trabajadores que prestan sus servicios en las cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, deberán ser asociados de las mismas, excepto en las siguientes condiciones.

- 1. Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las actividades normales y permanentes de la cooperativa.*
- 2. Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al régimen de trabajo asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio, siempre que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la cooperativa.*
- 3. Para vincular personal técnico especializado, que resulte indispensable para el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la cooperativa, que no exista entre los trabajadores asociados y que no desee vincularse como asociado a la cooperativa."*

En el presente caso, se observa que el demandante fue asociado de la cooperativa para prestar sus servicios en labores de vigilancia y seguridad privada a terceros, como lo fue por ejemplo el edificio CONTINENTAL TOWERS según lo que se informó en el propio interrogatorio de parte y de lo que dieron cuenta los testigos, así como algunos documentos como la distribución de turnos, situación que en el fondo no es lo que se está discutiendo, es decir, la prestación personal como tal de un servicio no es controvertida por la demandada.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ese tipo de vinculación es perfectamente posible dada la naturaleza misma de las CTA, ubicándose así por fuera de las excepciones previamente referidas. Esto además de así permitirlo el artículo 6º del Decreto 468 de 1990, en tanto establece que las CTA deberán organizar directamente las actividades de trabajo de sus asociados con autonomía administrativa y bajo su responsabilidad, "... características éstas que deberán también prevalecer cuando se conviene o contrata la ejecución de un trabajo total o parcial a favor de otras cooperativas o de terceros en general". Significa esto último, que no por el hecho de prestar

servicios a terceros, el asociado se convierte en un trabajador de la propia COOPERATIVA, ni tampoco de ese tercero.

Más aun, encuentra la Sala las siguientes circunstancias fácticas que se derivan de la documental aportada, relevante para la decisión del conflicto:

a) El Acuerdo Cooperativo de Trabajo Asociado, mediante el cual el actor se compromete y obliga a aceptar la legislación cooperativa, los estatutos y los regímenes de trabajo asociado, de previsión y seguridad social y de compensaciones prescritos por la cooperativa sin sujeción a la legislación laboral ordinaria (Páginas 34 a 36 archivo demanda);

b) Copia de los estatutos de la Cooperativa como empresa asociativa especializada en servicios de vigilancia y seguridad privada (Páginas 41 a 62);

c) Certificado de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia donde consta que a la demandada le fue reconocida personería jurídica desde el 6 de octubre de 2010 (hace 12 años), contando con una importante tradición en el sector solidario de la economía;

d) que su objeto consiste en *"Generar y mantener trabajo sustentable para sus asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno, vinculando voluntariamente el esfuerzo personal y los aportes económicos de sus asociados, para la ejecución de labores materiales o intelectuales relacionados con prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada..."* (Pág. 28 archivo demanda);

e) En diversos documentos se evidencian comportamientos asociativos, como los comprobantes de pago de diversos conceptos relativos al sistema cooperativo; certificaciones laborales; constancias

de procesos disciplinarios; cartas cruzadas, etc, mediante la cuales las partes se comportan y asumen una actitud orientada a considerarse dentro de un régimen de trabajo asociado.

De las anteriores pruebas, en su conjunto, se colige tanto la actitud de las partes en cuanto tenían entendido estar ejecutando un contrato de asociación, como la voluntad libre del actor de asociarse a la cooperativa demandada, vinculación que tiene completo respaldo legal, sin que con ello se genere una relación de tipo laboral según se reclama en la demanda y en lo que se insiste a través del recurso de apelación.

Al resolver una Acción Pública de Inconstitucionalidad contra los artículos 59, 135 y 154 de la Ley 79 de 1988, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-211 de la Sala Plena, fechada en marzo 1º de 2000, se indicó:

“Las Cooperativas de Trabajo Asociado se diferencian de las demás en que los asociados son simultáneamente los dueños de la entidad y los trabajadores de la misma, es decir, que existe identidad entre asociado y trabajador. Siendo así no es posible hablar de empleadores por una parte, y de trabajadores por la otra, como en las relaciones de trabajo subordinado o dependiente. Esta la razón para que a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les apliquen las normas del CST, estatuto que regula solamente el trabajo dependiente, esto es, el que se presta bajo la continuada dependencia o subordinación de un empleador y por el cual el trabajador recibe una retribución que se denomina salario.

(...) Ahora bien: si la asociación en esta clase de cooperativas es absolutamente libre y voluntaria resulta claro que quienes a ella deseen vincularse deben conocer las normas que las rigen y los derechos que les asisten, como también las ventajas, riesgos y posibilidades que representa esta clase de trabajo frente al trabajo dependiente. La ley no les impone a los trabajadores ese rumbo; simplemente crea un sistema diferente de trabajo que en nada vulnera el ordenamiento superior.”

En similar sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 3436 del 16 de junio de 2021 advirtió:

“Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son aquellas empresas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios económicos, profesionales, intelectuales o científicos, para lo cual fijan sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones. En este sentido, una característica principal de tales entes es que sus asociados gozan de plena autonomía técnica, administrativa y financiera en la prestación de sus servicios, y por ello no se rigen por la legislación sustantiva y ordinaria laboral.

Bajo esta perspectiva, esta Corporación ha destacado que dicho tipo de organización de trabajo autogestionario constituye una importante, legal y válida forma de trabajo, paralela a los vínculos subordinados (CSJ SL6441-2015). De hecho, es una figura que está amparada por los artículos 25, 38 y 39 de la Constitución Nacional, que garantizan y reconocen los derechos al trabajo y a asociarse o constituir asociaciones sin intervención del Estado; y también están respaldadas en la Recomendación 193 de la OIT, que entre los principios fundamentales del cooperativismo establece la solidaridad, las libertades de empresa y de organización, la existencia interna de participación democrática y económica de sus miembros y la prestación de sus servicios con autonomía e independencia.”

Consecuentemente, por no tratarse de una situación de tercerización laboral en donde se pretenda la declaratoria de una relación laboral con la empresa usuaria, y sin hallar demostrada la existencia de un contrato de trabajo en los términos pretendidos, sino un genuino convenio de asociación con la cooperativa demandada en su carácter de trabajo asociado, se mantendrá lo decidido en la sentencia que por apelación de la parte actora se revisa en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo del demandante por haber sido vencido en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$250.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 25 Laboral del Circuito de Medellín el día 9 de julio de 2021.

Costas en esta instancia a cargo del demandante por haber sido vencido en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$250.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **81c24c54c509ad01a1ef64aceaa0d58a1029a7fbd12197c845b79fbf796a6e5f**

Documento generado en 11/08/2022 01:44:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>